SÍNTESIS DE RECOMENDACIÓN 26/2013

Recomendación N°	26/2013
Autoridades Responsables	Presidente Municipal de Ciudad Fernández
Expediente	1VQU-314/2012
Fecha de emisión	11 DE DICIEMBRE DE 2013
HECHOS	
<p>El 27 de septiembre de 2012, este Organismo Público recibió Expediente que remitió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, relacionado con la denuncia que presentó el Secretario del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Nayarit, en la cual hizo del conocimiento de posibles violaciones a derechos humanos, cometidas en agravio de V1, V2 y V3, por actos atribuibles a elementos de la Policía Preventiva Municipal de Ciudad Fernández, San Luis Potosí.</p> <p>Con relación a los hechos, V1 y V2 manifestaron que el 24 de junio de 2012, aproximadamente a las 21:00 horas, circulaban a bordo de una motocicleta en la Comunidad de Arroyo Hondo, perteneciente al municipio de Ciudad Fernández, y que durante su trayecto se encontraron con V3, menor de edad, quien les solicitó que lo llevaran e intentó subirse al vehículo, ante la negativa de V1.</p> <p>En ese momento, llegaron elementos de la Policía Preventiva Municipal de Ciudad Fernández y procedieron a practicarles una revisión corporal a las víctimas. Al respecto, V1 señaló que de la bolsa de su pantalón uno de los agentes le sacó “algo” expresándole que lo perjudicaría; V2 refirió que en el lugar de la detención sólo fue revisada, y V3 relató que lo colocaron contra la pared, lo revisaron y le encontraron semillas de un estupefaciente. Que al concluir la revisión, los esposaron y los subieron a una patrulla de la Policía Municipal, para enseguida llevarlos a un sitio despoblado, que V1 reconoció como “El Chivato”.</p> <p>V1 manifestó que al llegar a ese lugar, los policías lo golpearon en distintas partes de su cuerpo, al igual que en sus testículos, lo desnudaron y le introdujeron por el recto parte del cañón de un arma de fuego, agresiones que las realizaban al momento que lo interrogaban sobre la propiedad, así como del origen del supuesto enervante droga que los policías le habían encontrado.</p> <p>Por su parte V2 y V3 expresaron que también los interrogaron sobre el origen del supuesto enervante, cuestionamiento que les hacían al mismo tiempo que recibían golpes y maltrato físico por parte de los aprehensores. Finalmente los agraviados fueron puestos a disposición del Agente del Ministerio Público Federal, por su probable responsabilidad en la comisión de delitos contra la salud.</p> <p>Para la investigación de la queja, este Organismo Estatal radicó el expediente 1VQU-314/2012, dentro del cual se recopilaron datos y documentos relacionados con los hechos, se solicitó información a la autoridad señalada como responsable, se entrevistó a las víctimas, se obtuvieron opiniones psicológicas, evidencias.</p>	
Derechos Vulnerados	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Al trato digno, ✓ A la integridad y seguridad personal consistentes en tortura, uso arbitrario de la fuerza pública y ejercicio indebido de la función pública.

OBSERVACIONES

Antes de entrar al estudio de las violaciones de derechos humanos, esta Comisión Estatal precisa que no se opone a la prevención y persecución de delitos por parte de las autoridades, sino a que con motivo de su combate se vulneren derechos humanos. Tampoco se pronuncia sobre las actuaciones realizadas dentro de los Procesos Jurisdiccionales iniciados tanto en los Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación, así como en el Juzgado Segundo Mixto de Primera Instancia Especializado en Justicia de Menores Infractores.

De los elementos de convicción que se recabaron en la investigación del presente asunto, se observó que el 24 de junio de 2012, aproximadamente a las 21:00 horas, V1, V2, mujer, y V3, menor de edad, fueron detenidos cuando viajaban a bordo de una motocicleta en la calle Juárez de la Comunidad Arroyo Hondo, perteneciente a Ciudad Fernández, por elementos de la policía municipal, con el argumento de que circulaban en sentido contrario.

En su informe, la autoridad municipal señaló que procedieron a realizar una revisión corporal a las víctimas, de cuyo resultado les encontraron en posesión de 12 semillas de un estupefaciente, así como de 12 bolsas plásticas en cuyo interior contenían un polvo blanco con características de una sustancia controlada por la Ley General de Salud, motivo por el cual procedieron a ponerlos a disposición del Agente del Ministerio Público de la Federación, sin hacer aportar datos sobre los señalamientos de las víctimas del maltrato que recibieron durante su detención.

Es de llamar la atención que en su denuncia, las personas agraviadas manifestaron que la detención ocurrió cerca de las 21:00 horas del 24 de junio de 2012, y que una vez que fueron detenidas les colocaron esposas y las llevaron a un terreno baldío, que V1 identifica como “El Chivatón”, lugar en que los señalados como responsables de la violación a derechos humanos, comenzaron a interrogarlas sobre la procedencia de las supuestas sustancias que les fueron encontradas, al mismo tiempo que las golpeaban.

En este sentido, en primer lugar se encontró evidencia suficiente para acreditar que en el caso se incurrió en retención indebida por parte de los aprehensores, ya que los policías aprehensores rebasaron con exceso el tiempo prudente para ponerlos a disposición de la autoridad competente, ya que su detención ocurrió cerca de las 21:00 horas, también se refuerza con lo que señalan los aprehensores en el Parte Informativo, que procedieron a la detención de las víctimas a las 21:20 horas del domingo 24 de junio de 2012, y fueron puestos a disposición de la autoridad competente a las 04:50 horas del 25 de julio de 2012.

Aunado a lo anterior, en los certificados médicos que les practicó a las víctimas AR3, Médico Legista de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Ciudad Fernández, se advierte que fueron revisados a partir de las 23:55 horas del 24 de junio de 2012, es decir, transcurrieron más de dos horas y media para que las personas detenidas fueran ingresadas a las celdas de la barandilla municipal, cuando, de acuerdo con la certificación que realizó personal de esta Comisión Estatal, la distancia de la Comunidad de Arroyo Hondo a la Comandancia de la Policía Municipal de Ciudad Fernández, se recorre en un tiempo aproximado de diecisiete minutos, sin que se hayan aportado elementos para justificar la tardanza entre la detención y el ingreso de las

víctimas a las celdas de la corporación.

Se observó que las víctimas fueron puestas a disposición del Agente del Ministerio Público de la Federación a las 04:50 horas del 25 de julio de 2012, según consta en el acuse de recibo en las constancias de la Averiguación Previa 1, lo que permite advertir que transcurrieron más siete horas desde el momento de la detención, hasta la puesta a disposición de las víctimas ante el Agente del Ministerio Público de la Federación, lo que no se realizó en un plazo razonable, tomando en cuenta que la distancia entre la oficina de la policía municipal a la de la autoridad ministerial, no es mayor a diez minutos en vehículo.

La autoridad señalada como responsable fue omisa en señalar que el traslado de las víctimas para ponerlas a disposición de autoridad competente le representó dificultades, ya sea debido al número de personas detenidas, a la distancia entre el lugar de la detención y las instalaciones del agente del Ministerio Público, o lo inaccesible de las vías de comunicación entre ambos sitios, o bien del riesgo del traslado para la puesta a disposición en atención a la gravedad del delito o el perfil de las personas detenidas, lo cual se considera un estándar para conocer si la autoridad se apegó a la legalidad; sin embargo no remitió información al respecto.

En otro aspecto, las personas agraviadas refirieron que durante su detención fueron víctimas de golpes y maltrato por parte de los elementos de la policía municipal de Ciudad Fernández, quienes bajo el supuesto del interrogatorio para obtener una confesión o señalamientos de responsabilidad entre las víctimas, les causaron afectación a su integridad física y emocional.

En el caso de V1, quien manifestó que al momento de que lo interrogaban sobre la procedencia de sustancias ilegales, lo golpeaban, al grado que lo desnudaron y uno de los policías le introdujo por el recto la punta del cañón del arma de fuego que portaba. En el caso de V2, quien refirió que fue víctima de golpes y que uno de los policías pateaba sus costillas, además de que se subía sobre su cuerpo; y V3 mencionó que recibió maltrato y golpes por parte de sus aprehensores.

Además del tiempo que transcurrió entre la detención para su internamiento en celdas municipales, que hace presumir que la versión de las víctimas es coherente y se apega a la realidad de que fueron llevados a un sitio despoblado para golpearlos, lo que se refuerza con las consideraciones vertidas por el Juez de Distrito quien en la Causa Penal 1, párrafo 52 de la resolución de término constitucional, precisó que de acuerdo con los datos de prueba existentes en las periciales médicas, se demostró que los inculpados sufrieron lesiones a base de tortura por parte de sus captores, circunstancia por la cual procedió a dejar a V1 en inmediata libertad.

En el párrafo 59 de la resolución de término constitucional, el citado juzgador federal precisó que no podía ser cómplice de tan graves violaciones a los derechos humanos, por lo que procedía a dictar auto de libertad. En el párrafo 60, expresó que su fallo no implicaba proteger la impunidad. impedir la investigación de delitos o castigar a los delincuentes, sino asegurar que las autoridades actúen con estricto apego a las leyes y a la Constitución, para que sean instrumentos efectivos de paz y seguridad social, no de opresores absolutos de las personas.

En el mismo sentido, tomando en consideración que V1 denunció que los policías aprehensores le introdujeron

el cañón de un arma de fuego por el recto, el Agente del Ministerio Público de la Federación solicitó el apoyo del médico legista de la Procuraduría General de Justicia del Estado, para la práctica de una revisión médica de integridad física y examen proctológico, cuyo resultado arrojó dilatación de esfínter anal y borramiento de pliegues radiados, con presencia de tres desgarros profundos recientes de bordes equimóticos y edematosos, lineales los cuales miden 1.5cm, 1cm y 0.6cm localizados entre las 1:00 y 2:00 horas, 6:00 y 7:00 horas, respectivamente, todas de acuerdo a la caratula horaria del reloj, precisando que V1 presentó penetración anal reciente.

Es de llamar también la atención el proceder de AR3, Médico adscrito a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Ciudad Fernández, quien tuvo un primer contacto con las víctimas, ya que de acuerdo con los certificados médicos que expidió, les practicó la revisión médica a las 23:55 horas del 24 de junio de 2012, anotando que no presentaban ningún tipo de lesión, lo cual es contrario a la verdad, ya que de las certificaciones posteriores se advirtió la presencia y tipo de lesiones que presentaba cada una de las víctimas.

La anterior circunstancia pone en evidencia y refleja un trabajo deficiente y carente de ética profesional por parte de AR3, Médico adscrito a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Ciudad Fernández, lo que amerita se realice una investigación administrativa para que se deslinden las responsabilidades a que haya lugar, y en su oportunidad se determine lo que en derecho corresponda.

En razón de lo expuesto, de acuerdo con las declaraciones de las víctimas, así como los dictámenes periciales, concatenados entre sí, permiten advertir que existen elementos para considerar que se cometieron actos de tortura, ya que se les infligieron intencionalmente dolores y sufrimientos físicos graves, con el fin de obtener una información sobre la procedencia de sustancias ilícitas, vulnerando con ello lo que establecen los artículos 1, de la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Cruelles, Inhumanos o Degradantes, y 2, de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.

Lo anterior debido a que se constató que la víctimas presentaron lesiones, las cuales se pueden atribuir a los elementos de la Policía Municipal de Ciudad Fernández que los aprehendieron, ya que aceptaron haber participado en su detención y posteriormente, haberlas puesto a disposición de la autoridad ministerial; por ello, esta Comisión Estatal advirtió que las conductas realizadas por los citados elementos de policía, constituyeron un abuso de poder, convalidándose con ello la relación causa efecto entre la tortura cometida y la responsabilidad institucional de los servidores públicos.

En efecto, de la evaluación psicológica que practicó a V1 por personal de este Organismo Estatal, con licenciatura en Psicología, de acuerdo con los lineamientos del manual para la investigación y documentación Eficaces de la Tortura y Otros Tratos o Penas Cruelles, Inhumanos o Degradantes, conocido como Protocolo de Estambul, en el cual se concluye que presentaba una afectación moderada en relación a los eventos de violencia ejercidos hacia su persona, observables en la constante sensación de angustia, que provoca un sentimiento de vacío, rasgos de ansiedad generalizada ya que no cuenta con la sensación de seguridad por lo que manifiesta sentimientos de inadecuación.

En este sentido, se observó que en el caso AR1 y AR2 elementos de Policía Municipal, infirieron a las víctimas agresiones físicas, provocándoles dolores, sufrimientos y daños corporales que se acreditó con las certificaciones médicas, cuyas lesiones fueron concordaron con el relato de las víctimas y contemporáneas a los hechos; que dejaron secuelas psicológicas, en particular en V1 y V2, como se advierte de los estudios que se les practicaron, y que los golpes que les propinaron era para obtener información sobre la procedencia de las sustancias controladas que al parecer tenían en su posesión.

El bien jurídico que tutela la tortura es la seguridad e integridad personal frente a quienes prestan un servicio público, y en el presente caso, los agentes de policía, garantes de la conservación del orden y seguridad pública, tenían la obligación de proteger a las personas en el ejercicio de sus funciones, lo que no aconteció, ya que se causó dolor y sufrimiento a las víctimas para obtener datos de la supuesta procedencia de sustancias ilícitas, acción reprobable que es necesario que se investigue de oficio al adecuarse con la descripción del tipo penal que señala el artículo 282 del Código Penal del Estado de San Luis Potosí, en relación con los numerales 3 y 11 de la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura, de que la comete el servidor público que con motivo de su cargo inflige a una persona dolores o sufrimientos sean físicos o psíquicos, para obtener información o una confesión, o castigarla por un acto que cometió o se sospeche que haya cometido.

Por lo expuesto, los servidores públicos municipales se apartaron de los dispuesto en los artículos 1, párrafo primero, 14, párrafo segundo, 21 párrafo noveno, y 22 párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 7 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos; 5, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y I de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, los cuales refieren que las personas gozarán de los derechos humanos, que se respete su integridad y seguridad corporal, que nadie podrá ser sometido a maltratos físicos ni psicológicos, y que la actuación de las instituciones de seguridad pública se regirán por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.

Por lo expuesto, las conductas que desplegaron los elementos de Seguridad Pública Municipal de Ciudad Fernández, pueden ser constitutivas de responsabilidad administrativa, de conformidad con el artículo 56, fracción I, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí, la cual establece que todo servidor público tendrá la obligación de cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la deficiencia de ese servicio o implique abuso o ejercicio indebido del cargo. Por tanto, es pertinente que se de vista al Órgano Interno de Control de la Dirección General de Seguridad Pública Tránsito Municipal de Ciudad Fernández, para que inicie la investigación correspondiente y en su oportunidad resuelva lo que en derecho proceda.

Por lo que respecta al pago de la reparación del daño, el sistema no jurisdiccional de protección de derechos humanos, de conformidad con lo establecido en los artículos 1, párrafo tercero, y 113, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 7, de la Ley de Responsabilidad Patrimonial para el

Estado y Municipios de San Luis Potosí, señalan la posibilidad de que al acreditarse una violación a los derechos humanos atribuible a un servidor público estatal, formule una recomendación que incluya las medidas que procedan para lograr la efectiva restitución de los afectados en sus derechos fundamentales y las relativas a la reparación del daño.

Por su parte, los artículos 61, 62, 63, 64 y 73, de la Ley General de Víctimas, señalan que las víctimas tienen derecho a que se les repare de manera integral y efectiva el daño sufrido a consecuencia de la violación a derechos humanos, lo que comprende medidas de restitución, compensación, así como garantía de no repetición; y que las víctimas serán compensadas en los términos que determine la resolución que emita el organismo público de protección de los derechos humanos, sin perjuicio de la responsabilidad civil, penal o administrativa que los mismos hechos, materia del pronunciamiento, pudieran implicar.

Resulta pertinente mencionar que la reparación del daño tiene como fin revertir, en la medida de lo posible, los efectos de una violación a un derecho o, en su defecto, asegurar que se tomen las medidas necesarias para aminorar los resultados de dicha violación.

En concordancia con ello y con el propósito de evitar que hechos como los analizados en el presente caso se repitan, es necesario que la autoridad impulse la capacitación a sus servidores públicos orientada hacia el correcto ejercicio del servicio y el respeto de los derechos humanos, en particular del derecho de las personas detenidas, al trato digno y prevención de la tortura.

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Se proceda a la reparación del daño en favor de V1, V2 y V3, que se traduzca en una compensación justa y equitativa, la cual incluya el tratamiento médico y psicológico necesario para restablecer su salud física y emocional,

SEGUNDA. Se colabore ampliamente en la investigación que inicie la Procuraduría General de Justicia sobre el presente caso, con el propósito de que se integre en debida forma la indagatoria penal, por tratarse de servidores públicos de la Dirección Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Ciudad Fernández.

TERCERA. Se de vista al órgano interno de control de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, a efecto que se inicie procedimiento administrativo de responsabilidad en contra de los servidores públicos que participaron en los hechos.

CUARTA. Se incluya en el programa de capacitación permanente a los elementos operativos de la Dirección Seguridad Pública y Tránsito Municipal, el tema de derechos humanos, en particular los derechos que prevalecen durante la detención, así como de prevención de la tortura.